

servadora como para los militares. Una nueva presidencia del caudillo era mal vista por las Fuerzas Armadas porque implicaba el retroceso en la compra de armamentos, la detención en las construcciones y el abandono de las industrias militares. Además, Yrigoyen se rehusaba a otorgarles a los cuadros del ejército la posibilidad de manifestar su voluntad política. Los conservadores consideraban que ya era hora de recuperar el control de la política argentina. Debido a la crisis mundial del 29 y el agotamiento del modelo agroexportador, Yrigoyen no era suficiente garantía para los intereses de este grupo.

Si bien el proyecto de país que los conservadores llevaron adelante se basaba en el modelo agroexportador, es necesario notar que el grupo no estaba compuesto por simples ganaderos y terratenientes, sino por empresarios que dividían su tiempo en actividades agropecuarias, comerciales y financieras. Por su tendencia especulativa, estos empresarios rechazaban todo tipo de rigidez económica y política que les impidiera orientar sus recursos hacia los sectores más rentables según el momento. De donde se desprende que la inestabilidad política les era funcional en dos sentidos: impedía la legitimación de otro grupo social y les permitía echar mano a la maquinaria estatal en función de sus necesidades. De lo que se desprende que "(...) el objetivo del grupo dominante era tener las manos libres de compromisos y tener acceso a las decisiones del Estado. A pesar de expresar un antiestatismo y de su liberalismo a ultranza esta fracción dominante debía todo al Estado"⁵.

El comienzo de la era militar: la Década Infame

El año 1930 inauguró una nueva etapa en el país. Se inició el período que, conocido como la "era militar", implicó la pretorización del sistema político argentino, es decir, la integración de las Fuerzas Armadas como un actor político más, saliendo de sus funciones específicas. El inicio de esta era, cuya víctima fundamental fue la sociedad argentina, se dio con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen.

Tuvieron que pasar más de 61 años para que un presidente constitucional pasara el gobierno a otro ciudadano elegido democráticamente. En 1928 el Presidente Marcelo T. de Alvear entregó los atributos del mando a Hipólito Yrigoyen. Este acontecimiento recién se volvió a repetir cuando en 1989 Raúl Alfonsín fue sucedido en la presidencia por Carlos Menem.

El especialista estadounidense Robert Potash⁶, autor de "El ejército y la política en la Argentina", sostiene: "No es exagerado decir que antes de los años '80 el ejército funcionaba como una fuerza política libre de control externo, con la capacidad y la tendencia a imponer su voluntad y sus prioridades al gobierno y a la sociedad (...). Entre 1930 y 1976, el ejército demostró seis veces esa capacidad, derrocando a las autoridades elegidas constitucionalmente y estableciendo regímenes militares. Es importante señalar que, en cada oportunidad, el ejército recibió estímulos importantes de la sociedad civil, y contó con la colaboración más o menos activa de las otras Fuerzas Armadas. Pero aun bajo regímenes constitucionales, cuando el ejército no estaba directamente involucrado en el ejercicio del poder, sus líderes desempeñaron un papel activo, propiciando u oponiéndose a políticas y programas específicos de las autoridades civiles. Justificando su intervención sobre la base de sus responsabilidades por la seguridad interna o externa, los líderes militares influyeron en una gran cantidad de campos."

El Siglo XX significó para la democracia argentina un muestrario de formas de violación al Estado de Derecho y con ello a los Derechos Humanos de la población. El primer atentado contra la Constitución se produjo el 6 de septiembre de 1930. Este golpe militar no fue realizado por una intervención institucional de las Fuerzas Armadas sino que implicó la colaboración de algunos miembros de las mismas con los sectores conservadores de la sociedad civil. En realidad existían diferencias muy marcadas incluso entre los militares. Mientras que el general Agustín P. Justo deseaba sólo derrocar a Yrigoyen y expulsar a sus partidarios del poder, el general nacionalista José F. Uriburu, quien encabezó el alzamiento, quería transformar las instituciones y poner fin al liberalismo. Sin embargo, el proyecto de Uriburu debió ser postergado porque no encontró el apoyo necesario para llevarlo adelante. Casi todos los civiles que acompañaron al general en su gobierno habían formado parte del antiguo régimen conservador.

En 1932, con la asunción de Justo como presidente electo, finalizó el gobierno de facto, pero en el marco de una democracia restringida ya que la UCR se encontraba proscripta. Se inauguró el período conocido como "la década infame", debido al continuo fomento del fraude electoral desde el gobierno.

Segunda subversión del orden constitucional y surgimiento del peronismo

El segundo ataque contra la democracia tuvo lugar el 4 de junio de 1943. Los generales Arturo Rawson y José Pedro Ramírez, de tendencia nacionalista, depusieron al presidente Ramón S. Castillo. En este período algunos

⁵ Rouquié, Alain; *Argentina hoy*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1982.

⁶ Potash, Robert; *El ejército y la política en la Argentina*, Editorial Sudamericana, 1971.

rama gremial del peronismo, y gracias a su control de las afiliaciones llegó a ocupar la presidencia real del partido. Detrás de él ganaron espacios importantes caudillos sindicales de trayectoria poco clara, como Herminio Iglesias, que alcanzó la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La candidatura a presidente recayó en Ítalo Luder, un jurista de prestigio pero con escaso poder real en el partido, que debía expresar el equilibrio entre las nuevas y viejas tendencias internas, pero que no pudo disipar la desconfianza que el peronismo despertaba en sectores importantes de la sociedad.

El radicalismo se renovó por impulso de Raúl Alfonsín, que en 1972 había creado el Movimiento de Renovación y Cambio para disputar el liderazgo a Ricardo Balbín. Durante el Proceso se distinguió del resto de los políticos, pues criticó a los militares con mucha energía, asumió la defensa de detenidos políticos y el reclamo por los desaparecidos y evitó involucrarse en la euforia de la guerra de Malvinas. Desde el fin de la guerra su ascenso fue vertiginoso, derrotando en la puja interna a los herederos de Balbín. Hizo de la democracia su bandera, y la combinó con un conjunto de propuestas de modernización de la sociedad y el Estado, una reivindicación de los aspectos éticos de la política y un discurso ganador, muy distinto del tradicional radical, que atrajeron al partido una masa de afiliados y simpatizantes.

Radicales y peronistas cosecharon amplios apoyos y dejaron poco espacio para otros partidos. A la derecha, siguió siendo difícil unificar fuerzas diversas, muchas de las cuales se habían comprometido demasiado con el Proceso como para resultar atractivas. El ingeniero Alsogaray constituyó un nuevo partido, la Unión del Centro Democrático, que empezó a beneficiarse con el impulso mundial hacia las concepciones ortodoxamente liberales, pero su cosecha mayor la haría años después. La izquierda padeció tanto por la dura represión de los años del Proceso como por la desactualización de sus propuestas, muchas de las cuales fueron tomadas por el radicalismo alfonsinista, aunque el Partido Intransigente logró reunir un amplio espectro de simpatizantes, en buena medida nostálgicos de la política de 1973.

Alimentados por la movilización de la sociedad y por esta segunda y apacible primavera de los pueblos, sin embargo los partidos tuvieron dificultades para dar plena cabida a las múltiples demandas y al deseo de participación, que fue diluyéndose lentamente o se mantuvo al margen de ellos, como en las organizaciones de derechos humanos, cada vez más intransigentes en una demanda que los partidos intentaban traducir en términos aceptables para el juego político. La misma dificultad se manifestó respecto de los intereses sociales más estructurados, como los sindicatos o los empresarios, cuyas de-

mandas discurrieron por los cauces corporativos y prescindieron de los partidos para su expresión o negociación. De ese modo, el crecimiento de los partidos no supuso una eficaz intermediación y negociación de las demandas de la sociedad.

Tal situación, sin embargo, no preocupaba demasiado, pues la sociedad estaba adhiriendo con entusiasmo a una democracia que entendía como la primacía de la civilidad. Las formas de hacer política del pasado reciente —la intransigencia de las facciones, la subordinación de los medios a los fines, la exclusión del adversario, el conflicto entendido como guerra— dejaban paso a otras en las que se afirmaba el pluralismo, los acuerdos sobre formas y una subordinación de la práctica política a la ética. Celebrando la novedad —en rigor, hacía seis décadas que se había dejado de lado este juego democrático— se valoró y hasta sobrevaloró la eficacia de este instrumento. Para cuidarlo, nutrirlo y fortalecerlo, se puso sobre todo el acento en el consenso alrededor de las reglas y en la acción conjunta para la defensa del sistema. Quizá por eso se postergó una dimensión esencial de la práctica política: la discusión —civilizada y plural— de programas y opciones, que necesariamente implican conflictos, ganadores y perdedores, y se confió en el poder y la capacidad de la civilidad unida para solucionar cualquier problema. Esta combinación de la valoración de la civilidad con un fuerte voluntarismo derivó en un cierto facilismo, en una especie de "democracia boba", aséptica y conformista.

Los problemas derivados de esto se verían más adelante. De momento, la civilidad vivió plenamente su ilusión, y acompañó al candidato que mejor captó ese estado de ánimo colectivo. El peronismo encaró su campaña con mucho del viejo estilo, convocando a la liberación contra la dependencia —con tan poca convicción que uno de sus candidatos, en un revelador lapsus, equivocó en un discurso público la opción positiva— y apeló a lo peor del folclore del movimiento para denostar a su adversario. Raúl Alfonsín, en cambio, ganó su candidatura en la UCR primero, y las elecciones presidenciales luego, apelando en primer lugar a la Constitución, cuyo Preámbulo —seguramente escuchado por primera vez por muchos de sus jóvenes adherentes— era un "rezo laico". Agregó una apelación a la transformación de la sociedad, que definía como moderna, laica, justa y colaborativa. Estigmatizó al régimen, aseguró que se haría justicia con los responsables y denunció en sus adversarios sus posibles continuadores, por obra del pacto entre militares y sindicalistas. Sobre todo aseguró que la democracia podía resolver no sólo los problemas de largo plazo —los cincuenta años de decadencia— sino satisfacer la enorme masa de demandas acumuladas y prestas a plantearse. La socie-

dad le creyó y el radicalismo, con más de la mitad de los votos, superó holgadamente al peronismo, que por primera vez en su historia perdía una elección nacional. Una alegría profunda y sustantiva, aunque un poco inconsciente, envió a sus seguidores y en alguna medida a toda la civilidad, que por un momento olvidó cuántos problemas quedaban pendientes y qué poco margen de maniobra tenía el nuevo gobierno.

Memoria y Dictadura

Un espacio para la reflexión
desde los Derechos Humanos

Tercera edición ampliada y actualizada

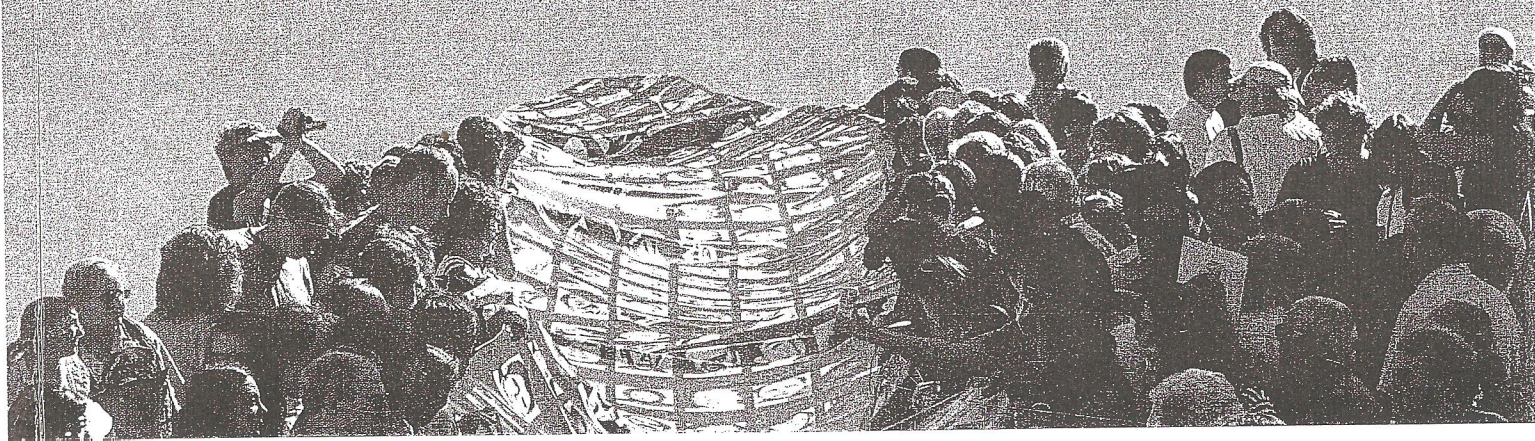
Secretaría de Educación de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos

ESPACIO
MEMORIA

INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA



Asamblea
Permanente
por los
Derechos
Humanos



Intervención militar y sistema político argentino

¿Cómo entender que en menos de un siglo en Argentina hubo seis golpes de Estado y que la crueldad y destrucción que produjeron culminó en el genocidio perpetrado por la dictadura establecida en 1976? Se trata de un complejo fenómeno que ninguna respuesta simplista puede abarcar. Los actores de estos procesos fueron múltiples y tuvieron distintos grados de responsabilidad.

Si bien la cara más visible de los derrocamientos de gobiernos constitucionales fueron las Fuerzas Armadas, por el uso de la violencia que éstos implicaron, esta institución no se sustentaba en el vacío. Para comprender sus intervenciones es necesario penetrar en la complejidad de la sociedad y del sistema político argentino.

Para entender los cíclicos golpes de Estado que asolaron el país entre 1930 y 1976, es imprescindible develar la íntima relación que se fue entablando entre los grupos económicos concentrados de capitales nacionales e internacionales, el Estado argentino y las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, a lo largo del siglo XX. Eran estos grupos concentrados los que golpeaban las puertas de los cuarteles y ponían al frente del gobierno a los líderes de las Fuerzas Armadas.

La "era militar"¹ comprende el período de la historia argentina en el cual las Fuerzas Armadas se constituyeron en una fuerza política actuante dentro del sistema democrático de partidos. Lejos de subordinarse a los intereses de la sociedad civil, las Fuerzas Armadas se alzaron contra ésta. Se presentaron como el único grupo social que se situaba por encima de los intereses sectoriales, y que encarnaba el "verdadero sentir nacional", con la misión de "mantener contra vientos y mareas el equilibrio colectivo"².

Para visualizar el papel que asumieron las Fuerzas Armadas en el siglo XX es necesario remontarse a las últimas décadas del siglo XIX.

De la consolidación del Estado Nacional a la crisis del '30

Hacia 1880, luego de décadas de enfrentamientos internos, se logró la unificación y consolidación del Estado Nacional Argentino y la integración del país en la economía mundial. La Argentina comenzaba a obtener los frutos de la implementación del proyecto de la llamada "generación del '80", cuyos objetivos centrales fueron:

- En lo económico, el país utilizó las ventajas comparativas que poseía (tierras fértiles, climas suaves, grandes extensiones), que le permitieron insertarse en el mercado mundial en calidad de agroexportador. El éxito de esta política económica se vio verificado en los números, ya que entre 1892 y 1923 se quintuplicaron la producción de trigo y las exportaciones generales. Esta inserción fue acompañada por la apertura al capital extranjero proveniente principalmente de Gran Bretaña.
- En lo social, la promoción de la inmigración bajo el lema de Juan B. Alberdi "gobernar es poblar" significó un importante aumento de la población. En 1870 la población urbana constituía 28,6% de los habitantes del país, en tanto que en 1914 esta proporción había trepado a 52,7%.
- En lo ideológico, la oligarquía gobernante inspirada en las ideas de la generación del '80 se embarcó en la tarea de homogeneizar, a través de la escuela pública, a una población que a causa de la inmigración era muy heterogénea. Acorde con este objetivo, se promulgó la Ley N° 1.420 que consagró la gratuidad, laicidad y universalidad de la educación de nivel primario. Pero no sólo la escuela estuvo al servicio del proyecto. El ejército suministró a la Nación independencia, valores y símbolos. Los recuerdos de los grandes hechos de armas y de los héroes militares conformaron la visión de una Argentina creada por sus generales. En 1902 con la Ley Ricchieri se creó el Ejército Nacional organizado de acuerdo al modelo prusiano y basado en la conscripción universal de todos los varones de 18 años de edad. Una vez aseguradas las fronteras con los países vecinos a partir de 1930 y hasta casi la finalización del siglo pasado este ejército cumplió fundamentalmente funciones de represión interna y control político³.
- En lo político, el grupo gobernante impulsó una forma de gobierno de tipo oligárquico, que impedía el acceso de la mayoría a los ámbitos de decisión y participación. Aun cuando la coyuntura internacional favorecía la prosperidad de la economía agroexportadora argentina, el proyecto de la oligarquía gobernante tuvo que ser modificado al recibir embates de porciones de la sociedad que no se hallaban representadas en él. Por un lado, buena parte de la inmigración, de filiación anarquista y socialista, impulsaba cambios estructurales en el modelo de país. Por otro lado, los sectores medios, que presionaban por el ingreso a carreras profesionales y ocupaciones a cuyo acceso la élite se opuso, comenzaron a organizarse en torno a un nuevo partido político,

1 Término acuñado por el historiador Alain Rouquié.

2 Beltrán, Juan Ramón en *Revista militar*, Buenos Aires, septiembre de 1936.

3 Para más información puede consultarse: Bayer, O.; Boron, A.; y Gambina J.; *El Terrorismo de Estado en la Argentina*, Buenos Aires, Instituto Espacio para la Memoria, 2010.

la UCR. Fueron estos últimos quienes consiguieron dos conquistas paradigmáticas:

1. La Reforma Universitaria que se inicia en la Universidad de Córdoba en 1918 como un gran movimiento cuyo objetivo fundamental era lograr el cambio de una institución de tipo feudal y monástica para tratar de adecuarla a la época en que se vivía. La modernización científica, la gratuidad, el co-gobierno de docentes, graduados y estudiantes, así como la obtención de las cátedras por medio de concursos de antecedentes y oposición, la extensión universitaria (la que implicaba la salida de la universidad a la sociedad en general), eran los caminos propuestos que conducirían a la construcción de una Universidad distinta. Una huelga general decretada por el estudiantado y apoyada por los gremios, la población de la ciudad de Córdoba, la Federación Universitaria Argentina (FUA) creada dos meses antes, logró que la Reforma se impusiera en las cuatro universidades argentinas de la época (Córdoba, Buenos Aires, La Plata y Tucumán) irradiándose hacia toda América Latina. El Manifiesto Liminar redactado por Deodoro Roca y sus compañeros se constituyó en un hito⁴.
2. La Ley Sáenz Peña que establecía el voto masculino, secreto y obligatorio. Uno de los grandes logros de esta ley fue el de impedir el fraude, moneda corriente en esos tiempos. Promulgada la ley se realizaron las elecciones nacionales de 1916. Fue elegido presidente de la Nación el radical Hipólito Yrigoyen. La oligarquía conservadora no logró conformar un partido de masas y por eso perdió la conducción política, pero el control de los resortes de la economía seguía en sus manos, ya que no se había producido ningún cambio estructural. Como dice Alain Rouquié en "Argentina hoy", a partir de 1916 la oligarquía desarrolló una "dominación sin hegemonía". Si bien este grupo no detentaba el gobierno del país, su importancia política y económica no había decaído y manejaban el rumbo de la Nación desde las sombras.

Internacionalmente se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial, que si bien interrumpió el flujo de las importaciones de bienes y de capitales, trajo aparejado un aumento en las exportaciones. El balance comercial presentó saldos ampliamente positivos. Pero esta coyuntura favorable fue breve y una vez terminada la guerra se hizo evidente que el modelo económico de la Argentina agroexportadora había encontrado su límite. La recuperación de las naciones europeas, el exceso de oferta y de excedentes agrícolas en el mundo, impulsaron la adopción de políticas proteccionistas que provocaron la caída de las exportaciones. Las consecuencias sociales no tardaron en llegar al país y se manifestaron en forma de graves conflictos.

En 1919 estalló un conflicto en la ciudad de Buenos Aires, en el taller metalúrgico Vasena. Los obreros exigían mejoras salariales y de condiciones de trabajo además de demandar la reincorporación de compañeros despedidos. La represión policial dejó varios muertos. Ante los acontecimientos la FORA (Federación de Trabajadores de la República Argentina) convocó a una huelga general que sufrió también los embates policiales, del ejército y de la Liga Patriótica (organización de ultraderecha fundada por Manuel Carlés ese mismo año). El saldo fue de 1.000 muertos y varios miles de heridos. Se conocieron estos episodios como "La Semana Trágica".

La Forestal era una empresa de capitales británicos, franceses y alemanes. Allí se desarrollaron diferentes huelgas, entre 1919 y 1921, para demandar a la patronal la mejora en las condiciones de trabajo y la reincorporación de trabajadores despedidos. Durante la tercera, la "gendarmería volante" (fuerza de choque de la empresa) y otros grupos parapoliciales, atacaron a los huelguistas con el apoyo tácito del gobierno nacional que no intervino para detenerlos, pero que luego condenó a 16 dirigentes a 8 años de prisión. Centenares de muertos fue el producto de la represión.

En la Provincia de Santa Cruz, entre 1920 y 1922, los trabajadores rurales nucleados en la Sociedad Obrera llevaron a cabo medidas de fuerza para exigir mejoras en las pésimas condiciones de trabajo y aumentos de las remuneraciones. Con el tiempo la protesta se fue extendiendo a otros grupos sociales.

El Gobierno Nacional presionó por un acuerdo entre los sectores en pugna que, una vez firmado, no fue respetado por los estancieros, lo que provocó que el conflicto se desatara nuevamente. El Ejército fue enviado a reprimir a los peones y dejó un saldo de 1.500 muertos.

Episodios como los anteriores provocaron un quiebre en las relaciones entre el ejército y el presidente Yrigoyen. El Ejecutivo Nacional esperaba que los uniformados se subordinaran a sus políticas, y recurría a ellos cada vez que necesitaba controlar los descontentos sociales o intervenir alguna provincia. Por su parte, en las filas militares había inquietud puesto que las Fuerzas Armadas rechazaban el rol policíaco que les asignaba el Estado.

Durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, la Argentina vivió años de prosperidad y de relativa tranquilidad. La moneda se fortaleció, la industria de la construcción entró en auge y los capitales retomaron la ruta de Buenos Aires. El nuevo presidente mantuvo relaciones más estrechas con la oligarquía conservadora que su antecesor y mejoró visiblemente las relaciones con las Fuerzas Armadas. Debido a este acercamiento el gobierno adoptó una política nacionalista e industrialista en nombre de la defensa nacional. Esta nueva actitud respondía a la idea de que los propios militares argentinos formaban un cuerpo técnico moderno.

El retorno de Yrigoyen a la presidencia planteó una amenaza tanto para los intereses de la oligarquía con-

4 El manifiesto liminar puede consultarse en: www.elhistoriador.com.ar/documentos/primeros_gobiernos_radicales/la_reforma_universitaria.php

hechos tuvieron gran importancia para el futuro del país: se conformó el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) entre cuyos integrantes se destacaba Juan Domingo Perón, quien ocupaba la Secretaría de Trabajo y Previsión. Este cargo le permitió un acercamiento a los grupos menos favorecidos de la sociedad, los cuales constituyeron una de las bases de apoyo del posterior movimiento peronista. El 17 de octubre se produjo el acontecimiento inaugural de dicho movimiento, que gravitaría sobre la vida política argentina durante más de medio siglo. La asunción del general Juan D. Perón como primer mandatario en 1946 significó el final de esta dictadura, al vencer en elecciones libres a la Unión Democrática.

La política peronista se caracterizó por un fuerte impulso a la participación del Estado en la dirección y regulación de la economía, a la vez que, hubo una generalizada nacionalización de las inversiones extranjeras, particularmente de empresas controladas por capital británico que se hallaba en pleno proceso de repatriación. Dentro de estas nacionalizaciones podemos mencionar la de los ferrocarriles, los teléfonos, la empresa de gas y algunas compañías de electricidad del interior. "Se dio fuerte impulso a Gas del Estado, construyendo el gasoducto de Comodoro Rivadavia, a la Flota Mercante y a la incipiente Aerolíneas Argentinas. El Estado avanzó incluso, en actividades industriales, no sólo por la vía de las fábricas militares sino por un grupo de empresas alemanas nacionalizadas. Pero la reforma más importante fue la nacionalización del Banco Central desde donde se manejaba la política monetaria, crediticia y el comercio exterior."⁷ Los principales instrumentos estatales utilizados para fomentar el desarrollo industrial fueron: créditos, controles físicos sobre las importaciones, tipos de cambio preferenciales para la importación de máquinas e insumos industriales, y para la exportación de manufacturas, un régimen de promoción sectorial y para fomentar el ingreso de capitales foráneos hacia la industria, y los menos frecuentes como el incremento de los aranceles y la intervención del Estado empresario. Otra medida de relevancia fue la cancelación de la deuda externa que luego de muchísimos años dejó de existir.

Las medidas de política económica del gobierno peronista supusieron una importante redistribución de los ingresos a favor de los sectores medio y bajo urbanos que permitió el sostenimiento del mercado interno. Esta tendencia se vio acompañada por una serie de medidas de política social que otorgaron a la clase obrera importantes beneficios. Durante esta presidencia se reglamentaron, entre otros, los convenios colectivos de trabajo, el estatuto del peón, el salario mínimo vital y móvil y las vacaciones pagas. Con la reforma constitucional de 1955 las reformas sociales quedaron asentadas en numerosos artículos. El 16 de junio de ese año hubo una tentativa de derrocamiento a Perón. La aviación naval bombardeó Plaza de Mayo y dejó un saldo de alrededor de 360 muertos y centenares de heridos. Con el declarado objetivo de asesinar al Presidente de la República (que salió ileso), se intentó un golpe de Estado. Las víctimas fueron civiles que circulaban por la zona.

El 16 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas al mando del general Eduardo Lonardi y el contraalmirante Isaac F. Rojas, ambos de tendencia antiperonista y conservadora, depusieron a Juan D. Perón en la tercera subversión al orden constitucional del siglo veinte. Este golpe de Estado fue conocido como Revolución Libertadora. Lonardi duró sólo 50 días en el cargo de presidente y fue reemplazado por el General Pedro Eugenio Aramburu. Este último representaba una facción castrense que se caracterizaba por ser más liberal en lo económico y más dura en materia de represión.

Ya instalado el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora, el 9 de junio de 1956 se produjo una insurrección contra el gobierno de facto encabezada por el General Valle con ramificaciones en todo el país, que fue rápidamente desbaratada. El General Valle, su líder, fue fusilado el 12 de junio, sin que mediara orden escrita ni Decreto.

También el 9 de junio de 1956 en el Partido de General San Martín del Gran Buenos Aires se ordenó la detención de 12 militantes peronistas y se los condujo a los basurales de José León Suárez donde la policía tenía la orden de fusilarlos. Cinco de ellos murieron y siete lograron huir. Uno de ellos, Juan Carlos Livraga será quien, con su testimonio, permitirá a Rodolfo Walsh reconstruir ese capítulo de la historia en su libro "Operación Masacre".

Se derogó la Constitución Nacional reformada en 1949 y se modificaron la mayoría de las conquistas sociales logradas por el movimiento obrero durante el gobierno peronista. En 1958 se realizaron nuevas elecciones nacionales y el candidato de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), Arturo Frondizi, obtuvo la presidencia de la Nación con el apoyo del electorado peronista. El partido peronista continuaba proscripto pese al pacto que el nuevo presidente había firmado con Perón que le permitió obtener el triunfo. Las políticas desarrollistas que se impulsaron tenían como objetivo el desarrollo de industrias básicas como el petróleo, la siderurgia y maquinarias. Para lograr el autoabastecimiento petrolero, Frondizi firmó contratos con empresas extranjeras que podían introducir sin pagar impuestos todo el material necesario para la explotación y los impuestos serían abonados en su totalidad por la empresa estatal YPF que debía comprar todo el petróleo que se extrajera al sector privado. Además las ganancias que obtuvieran las compañías podrían ser giradas al exterior con absoluta libertad. Esto contradecía lo que en su libro "Petróleo y Política", había escrito Frondizi. La oposición fue enconada.

Otro gran revuelo fue la discusión sobre el impulso que el Ministro de Educación Luis Mac Kay dio a la reglamentación del artículo 28 del Decreto N° 4.403 del año 1955 de la Revolución Libertadora, que establecía que

7 Romero, Luis Alberto; *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994.

“la iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir los diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente”. Se convirtió en la Ley conocida como “Ley Domingorena” que acabó con el monopolio del Estado en materia educativa y que dividió a la sociedad en dos grupos: el de los partidarios de la enseñanza laica (el movimiento estudiantil, los sectores de tradición liberal, anticlerical y de izquierda) y el de quienes acordaban con la enseñanza privada que contó con el total apoyo de la Iglesia católica.

El modelo desarrollista comenzó a aplicarse pero en menos de un año fue interrumpido por la imposición de las fracciones del capital concentrado de origen local. Estas últimas lo veían demasiado populista. Como resultado se impuso un cambio radical, expresado con la asunción de Álvaro Alsogaray, a mediados de 1959, como Ministro de Economía. Alsogaray era un economista de confianza de los grupos de poder y avalado por los militares por haber realizado también la carrera militar. El giro radical, que el nuevo ministro dio a las políticas de económicas y sociales, tuvo su respuesta en las urnas. En las elecciones legislativas del 27 de marzo de 1960, el “voto en blanco” (expresión del peronismo) representó 25% de los sufragios. Esto mostró la ruptura de la alianza con el peronismo⁸.

El 23 de marzo de 1962 tuvo lugar el cuarto golpe de Estado. Su cabeza visible fue el general Raúl Poggi quien destituyó al presidente Frondizi. Sin un proyecto político definido, el alzamiento respondió a los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas y a la decisión militar de presionar al poder político. Ante la renuncia del vicepresidente, como producto de desavenencias con el Ejecutivo sobre la cuestión petrolera, asumió José María Guido (titular provisional del Senado), quien juró como presidente ante la Corte Suprema de Justicia.

Este golpe de Estado se enmarcó en una etapa de división dentro del ejército que enfrentó a azules y colorados. Ambas facciones estaban integradas por militares antiperonistas que habían participado en el derrocamiento del general Perón, pero que albergaban distintas ideas con respecto a la significación del movimiento peronista. Los colorados lo consideraban como un movimiento de clase sectario y violento que había socavado los fundamentos de la jerarquía social. En una actitud más social mostraban el prejuicio contra los migrantes internos (“cabezas negras”) que habían sido parte del sustento del peronismo. Esto explica el acercamiento a los “radicales del pueblo”, representantes de los pequeños empresarios, chacareros, profesionales y funcionarios públicos⁹. Muy diferente era la opinión de los azules, quienes consideraban que el peronismo, a pesar de sus excesos y de su demagogia, era una fuerza nacional y cristiana que había permitido salvar a la clase obrera del comunismo, constituyendo, por lo tanto, un verdadero bastión contra la subversión. Esta opinión era compartida por los industriales y la gran patronal que apreciaban el sentido de compromiso de los dirigentes sindicales peronistas. Los azules se identificaban con la clase dirigente; nacionalistas y tradicionalistas modernizadores, privilegiaban los valores de obediencia y disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. La derrota de los colorados trajo aparejada una compleja reorganización ministerial y el compromiso de organizar elecciones libres pero sin que el peronismo pudiera participar. El 12 de octubre de 1963, la asunción del radical Arturo Illia dio por terminada esta cuarta intervención armada.

Hacia un nuevo modelo de intervención militar: el golpe de Onganía

El 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía encabezó el quinto golpe de Estado del siglo, esta vez contra el presidente constitucional Arturo Illia. Los tradicionales sectores cívico-militares estaban disconformes con las políticas de un gobierno que, pese a haber sido elegido en comicios donde el peronismo estaba proscripto y con sólo 25% de los votos (20% de los sufragios fueron en blanco siguiendo la orden de Perón), había dado muestras de independencia frente a las políticas de Estados Unidos en la región, como lo prueban la anulación por el Decreto N° 744 del 15 de noviembre de 1963 de los contratos petroleros con empresas extranjeras firmados por Frondizi, la oposición a la invasión a Santo Domingo el 7 de abril de 1965 (que se valió de la OEA para la creación de una fuerza interamericana de intervención). La sanción de una ley que afectaba los intereses de la gran industria farmacéutica conocida como la Ley Oñativia, y el respeto por la autonomía de la Universidad Pública. Desalojar al dirigente radical no implicaba, sin embargo, desactivar un riesgo grave de “izquierdismo” o “populismo”.

Hubo dos importantes frentes de resistencia contra el gobierno de facto: el movimiento obrero, que vio fuertemente cercenados sus derechos y fue duramente perseguido, y la Universidad y el movimiento estudiantil, que desde 1956 habían logrado altísimos niveles de excelencia académica y se habían transformado en un bastión de la democracia. El protagonismo del movimiento estudiantil en la década del 60 se acentuó en las calles al oponerse a la invasión a Santo Domingo. Los Centros de Estudiantes de la UBA y de la FUA se organizaron para expresar su repudio a dicha invasión, estrechando lazos con la CGT.

⁸ Pigna, Felipe; *Lo pasado pensado*, Buenos Aires, Planeta 2005.

⁹ Recordemos que por ese entonces el partido radical se encontraba dividido en Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP).

El 12 de mayo en un acto convocado por la Central de los Trabajadores murió trágicamente el estudiante Daniel Horacio Grinbank y algunos estudiantes resultaron heridos. El Gobierno argentino decidió no participar en la invasión.

Otro episodio fue el acto organizado en ocasión del 51 aniversario de la muerte de Julio A. Roca en el que estuvieron presentes autoridades nacionales y altos jefes militares que fue interrumpido por una lluvia de monedas arrojadas por los estudiantes desde la Facultad de Ciencias Exactas a los generales entre los que estaba Onganía. El Jefe de Policía opinó que la culpa de lo sucedido era de la autonomía universitaria.

El mundo académico sufrió un embate irreparable en lo que se conoció como "La Noche de los Bastones Largos" en 1966 acompañada por el Decreto-Ley N° 16.912 que anulaba el gobierno tripartito y subordinaba a rectores y decanos de las ocho Universidades Nacionales al Ministerio de Educación. La noche del 29 de julio la policía irrumpió en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires y apaleó a alumnos y profesores. Gran parte de los mejores científicos e intelectuales del país debieron emigrar y el nivel de la Universidad decayó notablemente.

De tendencia nacionalista liberal, los proclamados objetivos de la autodenominada "Revolución Argentina", eran la modernización del país y la grandeza de la Nación, los cuales, se lograrían a partir de la implementación de un programa que constaba de tres tiempos sucesivos: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político.

En las décadas del 60 y 70, líderes como los sindicalistas antiburocráticos Agustín Tosco, René Salamanca, Atilio López y Elpidio Torre, entre otros, presentaban un perfil adverso a cualquier tipo de concesión que perjudicara las reivindicaciones de los sectores que representaban y estaban al frente de grandes sindicatos que mostraban una abierta oposición a la dirigencia sindical burocrática. Las alianzas que establecieron con los estudiantes herederos de la Reforma Universitaria (sellada en forma permanente a partir de la muerte, en septiembre de 1966, del estudiante Santiago Pampillón por la represión policial) tuvieron el apoyo de amplios sectores populares y produjeron un acontecimiento histórico, continuación de las grandes luchas llevadas a cabo desde principio del Siglo XX por el movimiento obrero organizado.

El Cordobazo no surgió por generación espontánea sino que reconoce como antecedentes más próximos a las importantes huelgas que en el año 1957, a nivel nacional, tuvieron como protagonistas a los ferroviarios, telefónicos, portuarios y el personal del transporte automotor. Las luchas de los trabajadores del frigorífico Swift constituyeron asimismo un hito fundamental en este proceso.

Medidas antipopulares tomadas por la dictadura de Onganía, como por ejemplo la derogación del sábado inglés, provocaron el efecto inmediato de una oposición sin fisuras y llevaron el 14 de mayo a una batalla campal en el centro de la ciudad. En Corrientes en la misma fecha fue asesinado por la policía, el estudiante Chelito Cabral durante una manifestación de protesta contra la privatización del comedor universitario en Rosario. El episodio produjo otra muerte, la del estudiante Adolfo Ramón Bello cuando se manifestaba por la muerte del compañero correntino. En Rosario la represión se cobró otra víctima, el estudiante-obrero de 15 años, Luis Norberto Blanco. Los estudiantes cordobeses tomaron el barrio de Clínicas y resistieron la acometida policial.

El Cordobazo se produjo el 29 de mayo de 1969. En un ambiente convulsionado, se decretó un paro para el 29 y 30 de mayo. La unidad de los trabajadores se logró con el acuerdo entre las dos CGT (Azopardo y de los Argentinos); la caída de la primera víctima de esos días, Máximo Mena, la reforzó. Fue el principio del fin del gobierno de Onganía y dejó el luctuoso saldo de decenas de muertos, cientos de heridos y más de 2.000 presos. Sólo la intervención del ejército logró controlar la situación.

Fueron también jalones importantes de la lucha, lo que se conoció como el Rosariazo y el levantamiento de obreros tucumanos de un ingenio azucarero por la falta de pago de sus salarios. Así se demostró a los militares y a los grupos de poder el grado de conciencia alcanzado por la población. La muestra más evidente de la influencia y la combatividad de los sindicatos: Sitrac, Sitram, Luz y Fuerza y otros, se convirtieron en la punta de lanza de un movimiento que dejó hondas huellas en la historia del movimiento de los trabajadores.

La consecuencia inmediata de esta resistencia popular fue la caída de Onganía y su reemplazo por el General Marcelo Levingston.

La presidencia de Levingston sólo duró unos meses, ya que se desviaba de la tendencia predominante en el Ejército encarnada por el General Alejandro Agustín Lanusse quien lo reemplazó. Partidario de la necesidad de llamar a elecciones, el nuevo presidente de facto promovía un Gran Acuerdo Nacional que condujo a elecciones en las que participó el peronismo pero sin que la fórmula pudiera ser encabezada por el jefe del movimiento, Juan Domingo Perón.

Durante esta gestión tuvo lugar el episodio conocido como "La masacre de Trelew". El 15 de agosto de 1972 se produjo un intento de fuga en la cárcel de Rawson donde se encontraban detenidos miembros de distintas organizaciones armadas y dirigentes sindicales, entre los que se encontraba Agustín Tosco. Por fallas en ese plan sólo pudieron fugarse veinticinco militantes. El grupo emprendió viaje hacia el aeropuerto de Trelew, allí, sólo seis abordaron el avión que los condujo a Chile. Los diecinueve restantes se entregaron en el aeropuerto sin oponer resistencia, fueron trasladados a la base aeronaval Almirante Zar. Civiles y medios de comunicación sirvieron de

testigos a fin de que sus derechos a la vida y al debido proceso fueran garantizados. Los diecinueve detenidos fueron fusilados el 22 de agosto. El resultado fue dieciséis asesinados y tres sobrevivientes.

En mayo de 1973 asumió su mandato el presidente electo Héctor Cámpora, quien al poco tiempo renunció para forzar una nueva elección que llevaría a Juan Domingo Perón nuevamente a la presidencia. El nuevo presidente asumió habiendo obtenido 62% de los votos.

Después de la muerte de Perón asumió la presidencia María Estela Martínez de Perón, quien llevó a su máximo poder a quien había sido secretario de su esposo, José López Rega, por lo que su influencia aumentó de modo exponencial. Fue nombrado Ministro de Bienestar Social y en sus oficinas y con fondos del Estado funcionaba el grupo parapolicial conocido como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que causó estragos mediante asesinatos y campañas intimidatorias que provocaron gran cantidad de exilios.

En marzo de 1975 se produce en Villa Constitución, una pequeña ciudad vecina a Rosario, de 62.806 habitantes (8.000 de los cuales trabajaban en los establecimientos de la fuerte industria metalúrgica localizados en la zona) un importante episodio de resistencia popular. El Gobierno de la época lanza el operativo "Serpiente Roja del Paraná" contra los trabajadores mediante detenciones masivas, muertes selectivas y la casi completa ocupación territorial por las Fuerzas Armadas, incluidas fuerzas de choque parapoliciales, sofocando el movimiento.

"La figura simbólica de Perón, una y muchas a la vez, había llegado a reemplazar a su figura real. Para todos, Perón expresaba un sentimiento general de tipo nacionalista y popular, de reacción contra la reciente experiencia de desnacionalización y privilegio. Para algunos esto se encarnaba en el líder histórico, que, como en 1945, traería la antigua bonanza, distribuida por el Estado protector y munificente. Para otros, Perón era el líder revolucionario del Tercer Mundo, que eliminaría a los traidores de su propio movimiento y conduciría a la liberación, nacional o social. Otros, encarnando el ancestral anticomunismo del movimiento, veían en Perón a quien descabezaría con toda la energía necesaria la hidra de la subversión social (...). Para otros muchos, Perón era el pacificador, el líder descarnado de ambiciones capaz de encausar los conflictos de la sociedad, realizar la reconstrucción y encaminar al país por la vía del crecimiento".¹⁰

El Estado Terrorista

El último ataque contra las instituciones democráticas fue el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" que comenzó el 24 de marzo de 1976 con el derrocamiento de Isabel Perón, presidenta en reemplazo de su esposo, muerto el 1º de julio de 1974. El proceso fue encabezado por una junta militar integrada por un representante de cada una de las Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina), y Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica). Esta última intervención militar constituyó la más violenta y represiva de todas las perpetradas durante el siglo XX.

El proceso que dio comienzo en 1976, al igual que las demás dictaduras latinoamericanas, respondió a factores internos y externos que se engendraron en un contexto histórico caracterizado por la guerra fría, una profunda crisis económica y el ascenso de la lucha política y las reivindicaciones de las masas populares. En América Latina la crisis económica estaba caracterizada por el agotamiento del modelo capitalista dependiente y una necesidad imperiosa de reconversión de ese modelo a través de la concentración del capital y la aplicación de políticas de transformación del aparato productivo.¹¹ Sin embargo, en contraposición, otro modelo de país se gestaba no sólo en Argentina sino también en América Latina: un proyecto basado en la búsqueda de la independencia, la soberanía, la garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de las mayorías populares.¹² Eran dos proyectos de país en pugna. Por su inclinación liberal, el llamado *Proceso* pretendía la implantación de un modelo económico de apertura que produjo el desmantelamiento de la industria nacional y el auge y predominio de la especulación financiera. Sus ideólogos no sólo esperaban cambios económicos, su objetivo también incluía cambios políticos y sociales que posibilitaran la imposición de un modelo de Nación acorde a los denominados valores occidentales y cristianos. Para concretar este modelo, debieron acallar toda forma de resistencia y oposición. Este plan fue previsto y preparado estratégicamente con la complicidad y participación de las fuerzas económicas, la Iglesia Católica, el poder judicial, el poder político, y numerosos medios de comunicación. Amparados en la autoproclamada Doctrina de la Seguridad Nacional (Ver Anexo N° 1), y agitando el falso fantasma del avance comunista, instauraron el Terrorismo de Estado con el saldo de miles de muertos y desaparecidos.

La particularidad del Estado Terrorista radica en que necesita, para ser posible, de un nivel mucho más alto de control de la sociedad civil que el exigido por un Estado militar. Requiere de una doble faz de actuación de sus

10 Romero, Luis Alberto; *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994.

11 Duhalde, Eduardo L. *El Estado Terrorista Argentino, Quince años después, una mirada crítica*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

12 Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Buenos Aires, y otros, *Dos demonios o dos proyectos de país*, Rosario, diciembre 2008.